

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 13 y 14: téngase presente.

**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que el 28 de noviembre de 2024 comparece doña Adriana Reboledo Laserre en representación de la **Federación Chilena de Tiro en Polígono** quien interpone acción constitucional de Protección en contra de la **Autoridad Fiscalizadora Local N° 28 de Santiago** y la **Autoridad Fiscalizadora Regional de Santiago**, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación, por parte de la primera recurrida, de la Resolución Exenta N° 230 de 11 de octubre de 2024 y en la dictación, por parte de la segunda, de la Resolución Exenta N° 22, de 11 de noviembre de 2022, en virtud de las cuales se niega la solicitud de aumento en el número de cupo de armas, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que: (i) el 27 de mayo de 2024 la Autoridad Fiscalizadora Local autorizó a la recurrente la inscripción de 2 armas para su utilización por los socios de los clubes de tiro asociados a la federación; (ii) en septiembre de 2024 se presentó una solicitud de autorización para la tenencia de hasta 20 armas, de conformidad a la ley 17.798; (iii) el 11 de octubre de 2024 la Autoridad Fiscalizadora Local N°28 denegó la solicitud de aumento del número de armas y; (iv) el 11 de noviembre de 2024 la Autoridad Fiscalizadora Regional rechazó un recurso jerárquico interpuesto al respecto.

Señala que la Resolución Exenta N° 230, de 11 de octubre de 2024, de la Autoridad Fiscalizadora Local N° 28 de Santiago, es ilegal, por cuanto la recurrida argumenta en ella que la petición de la actora vulneraría el espíritu de las modificaciones legales y reglamentarias en orden a la disminución de armas y municiones en poder de los particulares, sin embargo, dicho argumento no resulta lícito ni legítimo, por cuanto lo relevante es la ley y su tenor literal, máxime considerando la finalidad deportiva y de capacitación de la recurrente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GWGSXTTNSSQ

Agrega que dicha resolución es arbitraria, por cuanto consta en la misma resolución que a instituciones similares a la recurrente se les ha autorizado el aumento de cupo solicitado.

De otra parte, indica que la recurrida yerra al sostener que acoger la solicitud de la recurrente implicaría que una cuarta entidad almacenaría armas en el mismo domicilio, esto es Los Ceramistas N° 8530, comuna de La Reina, por cuanto las instituciones que funcionan en dicho domicilio son distintas entre sí, con personalidad jurídica diferente.

Añade que la resolución recurrida infringe la doctrina de los actos propios, por cuanto el 11 de agosto de 2020 se autorizaron a Inmobiliaria y Armería La Reina S.A. cupos extraordinarios de armas y municiones mayores.

En lo relativo a la Resolución Exenta N° 22, de 11 de noviembre de 2022, de la Autoridad Fiscalizadora Regional de Santiago, afirma que en ella se razona sobre la base de un presupuesto erróneo, por cuanto en el domicilio indicado existen diversas instituciones deportivas, lo que implica que a cada una de ellas les asiste el derecho a tener el número de armas permitidos por la ley.

Sostiene que, en consecuencia: (i) las resoluciones impugnadas carecen de motivación suficiente y; (ii) se incurre en ellas en una falsa interpretación legal, lo que las torna ilegales y, en consecuencia, adolecen de un vicio de nulidad de derecho público.

Previa referencia a doctrina, normativa y jurisprudencia que estima pertinente, solicita que se ampare a la recurrente en sus derechos constitucionales y legales en cuanto a dejar sin efecto la sanción aplicada consistente en la expulsión de la organización deportiva recurrida (sic) con costas.

**Segundo:** Que por las recurridas evacuó informe la Coronel de Carabineros doña Paola Martínez Sciaraffia, quien solicita el rechazo del presente arbitrio.

Expone que la razón por la cual se negó la solicitud de la actora de aumento de cupo dice relación con que, si se accediera a ello, se superarían los cupos máximos de almacenamiento de armas establecidos en el domicilio de la solicitante, esto es, Los Ceramistas N°8530 de la comuna de La Reina,



por cuanto en dicha ubicación ya funcionan otras tres entidades, a saber: (i) Inmobiliaria y Armería La Reina S.A. con un cupo autorizado de 60 armas cortas, 70 armas largas, 25.000 proyectiles únicos y 200.000 proyectiles múltiples; (ii) Club de tiro Deportivo La Reina, con un cupo autorizado de 36 armas, 3 máquinas recargadoras, 45.000 proyectiles únicos y 200.000 proyectiles múltiples y; (iii) Federación Nacional de IDPA, con autorización para 20 armas, contando con 14 armas inscritas.

Hace presente que las cuatro entidades que funcionan en el domicilio indicado realizan actividades de tiro deportivo, comercio de armas, capacitación e instrucción de tiro, y que algunos de sus dirigentes se repiten en sus directorios.

Explica que, considerando las cuatro entidades, mantienen en conjunto un cupo autorizado para almacenar 208 armas en el mismo domicilio, habiéndose inscrito 140, lo que sobrepasa el número total de 130 armas que permite almacenar el artículo 113 de Reglamento Complementario de la ley 17.798 sobre Control de Armas, por lo que no se puede autorizar un número mayor de armas en el mismo domicilio.

En lo relativo a la arbitrariedad alegada en el libelo, afirma que las autoridades fiscalizadoras no han hecho una interpretación antojadiza o falsa de la normativa, sino que en el caso se dio aplicación a la normativa vigente que señala que existe un número máximo de armas y municiones que se pueden inscribir y almacenar.

En cuanto a la supuesta nulidad de derecho público, asevera que los actos impugnados en autos no adolecen de vicio alguno, por cuanto fueron emitidos por autoridad competente, dentro del ámbito de sus facultades y cuentan con la debida fundamentación.

**Tercero:** Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.



Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

**Cuarto:** Que, a través de la presente acción constitucional, la actora cuestiona la Resolución Exenta N° 230 de 11 de octubre de 2024, de la Autoridad Fiscalizadora Local N° 28 de Santiago, en virtud de la cual se rechazó su solicitud de aumento en el número de cupo de armas, y la Resolución Exenta N° 22, de 11 de noviembre de 2022 de la Autoridad Fiscalizadora Regional de Santiago, en virtud de la cual se rechaza un recurso jerárquico interpuesto en contra de la primera.

**Quinto:** Que, de la atenta revisión del contenido de las alegaciones consignadas en el libelo y del informe de la recurrida, es posible constatar que las actuaciones y decisiones impugnadas han sido dictadas por la autoridad competente y dentro del ámbito de sus facultades sujetándose a lo previsto Reglamento Complementario de la ley 17.798 sobre Control de Armas, de manera tal que, en el caso en examen, esta Corte no aprecia la existencia de un acto o actuación ilegal, ni tampoco arbitraria en tanto el acto se encuentra debidamente motivado.

**Sexto:** Que, en efecto, tal como consta en las resoluciones impugnadas, la negativa a la solicitud de la actora dice relación con que en el mismo domicilio ya existen otras tres instituciones que cuentan con autorización para almacenar una cantidad de armas que sobrepasan lo permitido por la legislación vigente, de forma tal que no se puede acceder al aumento de cupo requerido por la recurrente sin excederse dicha limitación, por cuanto los parámetros del artículo 113 del referido reglamento dicen relación con un número de armas almacenados en un mismo lugar, máxime considerando que dichas armas se almacenarían en las mismas instalaciones y bajo las mismas medidas de seguridad.

**Séptimo:** Que, no obstante lo anterior, la actora mantiene su derecho a recurrir ante la autoridad administrativa pertinente -Dirección General de Movilización Nacional-, como lo ha señalado en estrados las



recurridas -local y regional- para los efectos de solicitar el aumento de cupo que reclama.

**Octavo:** Que, no advirtiéndose ilegalidad o arbitrariedad cometida por las recurridas, el presente arbitrio será desestimado.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve, que **se rechaza**, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de la Federación Chilena de Tiro en Polígono, en contra de la Autoridad Fiscalizadora Local N° 28 de Santiago y la Autoridad Fiscalizadora Regional de Santiago.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

**N°Protección-24.474-2024.**

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GWGSXTTNSSQ

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Inelie Duran M., Ministra Suplente Paula Rodriguez F. y Abogado Integrante Cristian Parada B. Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GWGSXTTNSSQ